



AMPARO INDIRECTO 162/2025

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

Zapopan, Jalisco, a las **once horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco**, en el expediente relativo al juicio de amparo indirecto **162/2025** (*data señalada en auto de tres de marzo de dos mil veinticinco*), promovido por *****; en audiencia pública **Carlos Calderón Espíndola**, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, quien actúa ante la fe de la secretaria que autoriza **Jackeline Huerta Castañeda**, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional fijada para este día y hora, sin asistencia personal de las partes.

ABIERTA LA AUDIENCIA: La secretaria da lectura a la demanda y hace una relación de constancias que lo integran, asimismo, **hace constar y certifica:**

1. Que no existe trámite alguno pendiente por desahogar en el sumario en que se actúa, toda vez que obran las constancias necesarias para emitir sentencia;
2. Que las autoridades responsables fueron llamadas al procedimiento constitucional;
3. Que no existe medio de convicción respecto del cual deba ordenarse su preparación, previo a la celebración de la presente audiencia; y,
4. Que atento a la naturaleza del acto reclamado, **no se ordenó** el llamamiento de tercer interesado, pues no se configura alguno de los supuestos previstos por el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo. **Conste.**

EL JUEZ ACUERDA: Téngase por hecha la relación de

ABIERTO EL PERIODO PROBATORIO: La secretaria da cuenta con las pruebas ofertadas por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda; así como las documentales allegadas con el informe rendido por la autoridad responsable.

Ahora, sin más pruebas que recibir ni desahogar, se declara concluido el presente periodo.

EL JUEZ ACUERDA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por **perdido el derecho de las partes** a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo.

V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto
162/2025; y,

I. Demanda de amparo. *****

JACKELINE HUERTA CASTAÑEDA
706a6620636a6632000000000000000000a6c6
15/05/26 18:00:00

DERAM

a. Este

a en el Est

del presen

y 107,

ública, 33

aro, así

la Federac

el Pleno

a determin

s judiciales

, a la jur

os Tribuna

vez que

ente en e

cto recla

culo 74, fr

car el ac

sponsable

demand

zar, interp

acción de

quiso dec

deben a

forme con

pinar cuá

a. Este
a en el Est
del presen
y 107,
ública, 33
aro, así
la Federac
el Pleno
a determin
s judiciales
o, a la jur
os Tribuna
vez que
ente en e

cto recla
culo 74, fr
car el ac
sponsable
demand
zar, interp
la acción de
quiso dec
e deben a
forme con
minar cuá

a. Este
a en el Est
del presen
y 107,
ública, 33
aro, así
la Federac
el Pleno
a determin
s judiciales
o, a la jur
os Tribuna
vez que
ente en e

cto recla
culo 74, fr
car el ac
sponsable
demand
zar, interp
la acción de
quiso dec
e deben a
forme con
minar cuá

izar, interp
la acción de
quiso dec
e deben a
forme con
minar cuál



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

en la esfera jurídica del particular y que fundan el reclamo constitucional.

Ello, tal como se obtiene de la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el registro digital 181810, Materias Común, Novena Época, Tomo: Tomo XIX, Abril de 2004, Página 255, de rubro y texto:

“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.”

El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.

En esa medida, del análisis integral de los datos que derivan de la demanda, se desprende que el acto que materializa el perjuicio jurídico que la parte quejosa, lo constituye:

Del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco:

■ ■ ■

n Pública
o de Jalisco
n del of

determina
olución de

estación p
sparencia

transparencia
personales d
en el ex

e los acto
al Pleno
ública y P
lisco y a

interior, la
de Just
VI del Ap
2000

ninguna persona a la libertad condicional no median la existencia de circunstancias esenciales y justificadas expedidas

co, en res
inticuatro
revisión *
ica con c
previame
e la Const
contemplan
dad jurídica

ninguna
persona
a libertad de
no median
e estable
esenciales
expedidas

"Artículo. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad



competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.."

Los preceptos constitucionales transcritos, en su orden, contienen las garantías de legalidad y seguridad jurídica; así el numeral 14 refiere, en lo conducente, como principio de legalidad, que la autoridad tiene como obligación, la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; en ese orden de ideas, al expedir cualquier mandamiento que pudiese afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones. Por lo que el gobernado debe estar cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, caso contrario estaría vulnerando su esfera jurídica.

Por cuanto hace al artículo 16 constitucional regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley, a efecto de que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley.

Bajo ese contexto, el numeral 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establecen que:

“Artículo 103. Recurso de Revisión - Ejecución

1. El sujeto obligado debe ejecutar las acciones que le correspondan para el cumplimiento de la resolución,

dentro del plazo que determine la propia resolución, el cual en ningún caso podrá ser superior a diez días hábiles.

2. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el Instituto le impondrá una amonestación pública con copia al expediente laboral del responsable, le concederá un plazo de hasta diez días hábiles para el cumplimiento y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se procederá en los términos del siguiente párrafo.

3. Si el sujeto obligado persiste en el incumplimiento dentro del plazo anterior, el Instituto le impondrá una multa de ciento cincuenta a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, le concederá un plazo de hasta cinco días hábiles para el cumplimiento y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se procederá en los términos del siguiente párrafo. Una vez impuesta la multa se remitirá a la autoridad fiscal estatal para su ejecución.

4. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el Instituto le impondrá arresto administrativo de hasta treinta y seis horas, dentro de los tres días hábiles siguientes, y presentará la denuncia penal correspondiente. Para la ejecución del arresto se remitirá la resolución a la autoridad municipal competente, y presentará la denuncia penal correspondiente..”

El precepto antes transcrito dispone que si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo de diez días, el instituto podrá imponer sanciones al sujeto obligado, mismas que podrán ser multa desde ciento cincuenta a mil quinientas veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como una amonestación pública con copia al expediente laboral del responsable, además del arresto administrativo de hasta treinta y seis horas, dentro de los tres días hábiles siguientes; sin embargo, para estar en condiciones de hacer efectivos los medios de apremio, deben atenderse a los requisitos mínimos para que proceda esa figura como medio que tiene la autoridad de hacer cumplir sus determinaciones, entre ellos, que esté debidamente notificado la persona a quien está dirigido.



En ese sentido, si el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que implica una obligación de hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse y se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, entonces, para que el acto de autoridad satisfaga los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica precisa de requisitos mínimos tales como:

- 1) La existencia de una determinación debidamente fundada y motivada, que debe ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el contradictorio, y
- 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al destinatario, con el apercibimiento que de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta.

Ahora bien, de las pruebas documentales aportadas al juicio, en específico, las copias certificadas de las actuaciones que integran el recurso de revisión *********, del que emanan los actos reclamados, mismas que por su naturaleza, hacen prueba plena en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, destacan las siguientes:

**** ***** *****, mediante escrito remitido por correo electrónico el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, debido a la respuesta que le fue otorgada respecto de la información que fue solicitada; recurso que mediante acuerdo de

- Bajo el apercibimiento que de no hacerlo se aplicarían las medidas de apremio correspondientes al o los servidores públicos que resulten responsables, de conformidad al artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

sus Municipios, y el artículo 69 del Reglamento que de ella deriva.

- Dicha resolución fue remitida mediante correo electrónico de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, a la cuenta ***** dirigido al titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco. (foja 32 del tomo de pruebas).
- Derivado del incumplimiento de la citada resolución, el veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, se emitió resolución en la que se tuvo al sujeto obligado ***** , Jalisco, incumpliendo con la determinación emitida en el recurso de transparencia, por lo que se impuso como sanción una amonestación pública, con copia al expediente laboral del entonces Director de la Unidad de Transparencia ***** ***** (quien terminó con su encargo el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro).
- Dicha resolución fue notificada, mediante correo electrónico de veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, enviado a la cuenta ***** dirigido al titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

Como se observa de lo reseñado con anterioridad, en resolución de **veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro**, se determinó imponer a la parte quejosa amonestación pública con copia a su expediente laboral, dentro del expediente del recurso de revisión número *********; **sin embargo, no se advierte la existencia de actuación alguna que ponga de manifiesto que previo a la imposición de esa sanción, se le haya notificado a la parte quejosa la**

encia.
constanci

itada por
querimiento
te lo ante

La situación la
ple con la
stituto pod



seis horas, dentro de los tres días hábiles siguientes; no obstante, para estar en condiciones de hacer efectivo los medios de apremio, deben atenderse a los requisitos mínimos para que proceda esa figura como medio que tiene la autoridad de hacer cumplir sus determinaciones, entre ellos, que esté debidamente notificado la persona a quien está dirigido.

Ilustra lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 20/2001, sustentada por consultable en la página 122, Tomo XIII, junio de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

“MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que,

En efecto, la emisión de un acto de autoridad debe contener la fundamentación y la motivación apropiada como requisito mínimo, acompañado del apercibimiento correspondiente, de donde deriva que el propio particular tenga la certeza de que el mandamiento ordena hacer o dejar de hacer algo y sus consecuencias, así, cuando al gobernado se le notifica dicho mandamiento, también se hace conocedor de lo que puede suceder si incumple con lo ordenado.

Lo anterior es de tal importancia, ya que la sanción decretada se encuentra sujeta al actuar del funcionario público en lo particular, pues de proceder con el cumplimiento de la resolución, no sería acreedor a la amonestación pública; pero en caso de no hacerlo, quedaría sujeto a la decisión que el Instituto responsable tomaría al respecto, situación que aconteció.

JACKELINE HUERTA CASTAÑEDA
706a6620636a6632000000000000000000a6c6
15/05/26 18:00:00



decretada, no tuvo la posibilidad para efectuar las medidas necesarias para evitar que pudiera concretarse la sanción en comento.

En esas condiciones, ante lo fundado del concepto de violación analizado, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la Materia, lo que procede es **conceder** el amparo y protección de la Justicia Federal a *****

***** para el efecto de que la autoridad responsable **Pleno**
del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, deje
insubsistente la resolución de ***** ** ***** ** **

*** ***** , emitida dentro del recurso de revisión
***** , en la parte relativa a la sanción impuesta a la parte
quejosa, así como sus consecuencias legales; y en su lugar
emita otra, en la que se abstenga de realizar la sanción antes
citada en contra del quejoso, al no existir constancia de
notificación del auto por el cual se le requirió en su carácter de
titular del sujeto obligado (once de septiembre de dos mil
veinticuatro); hecho lo cual, obre en consecuencia con plenitud
de jurisdicción.

Al haber resultado fundado el concepto de violación que se ha examinado en la presente resolución, resulta innecesario avocarse al estudio de los restantes, pues en ellos el inconforme pretende evidenciar la ilegalidad de la sanción precisada; sin embargo, aun cuando se declararan fundados no alcanzaría un beneficio mayor que el obtenido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/316, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 83, tomo 80, Agosto de 1994, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

VIOLACIÓN. Si en los capítulos que se refieren a los actos de corrupción sobre este particular, se hace extensiva la aplicación del artículo 77 de la Ley de Jalisco Municipal como una violación a la ley, se concede a las razones que derivan de la subsistencia de la misma, la Sala de lo Penal en el Sereno de la 4221, Q. de Jalisco.

VIOLACIÓN. Si en los capítulos que se refieren a la violación de los artículos sobre este particular, no se hace extensiva la responsabilidad al Estado de Jalisco Municipal como una entidad que se concele las razones que derivan de subsistir en el interior, la Sala de en el Ser 4221, Q

CUCIÓN. s de la a los actos no vicio de n.”.

y con ap

77 de la L

[illegible]

VIOLACIÓN. Si en los capítulos que se refieren a la violación de los artículos sobre este particular, no se hace extensiva la responsabilidad al Estado de Jalisco Municipal como una entidad que se concele las razones que derivan de subsistir en el interior, la Sala de en el Ser 4221, Q

CUCIÓN. s de la a los actos no vicio de n.”.

y con ap

77 de la L

[illegible][illegible][illegible][illegible]



Jalisco; y, Oficial Mayor Administrativo del Gobierno Municipal de Sayula, Jalisco, los cuales se precisaron en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo.

Notifíquese.

Así lo resolvió y firma el licenciado **Carlos Calderón Espíndola**, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, ante la fe de la secretaria que autoriza y da fe **Jackeline Huerta Castañeda**.

La secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, **certifico**: Que la presente actuación se encuentra incorporada al expediente electrónico respectivo, en términos del artículo 3º, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. **Doy fe.**

Jackeline Huerta Castañeda

JACKELINE HUERTA CASTANEDA
706a6620636a66320000000000000000a6c
15/05/26 18:00:00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

105533681_5745000037320039012.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	JACKELINE HUERTA CASTAÑEDA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.a6.c6	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:17:54 - 31/03/25 15:17:54	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	39 42 84 ca 5d 69 76 b1 ce 5c c9 4c ac 4c f2 c7 5a b3 b1 eb 2d fa 1e c0 29 83 81 43 bf d0 c8 e7 22 7d 64 06 ae b6 2b 2e f2 2a bf f2 49 11 9e fa f9 5a 81 9d 4b d3 4b b0 15 03 eb f5 13 c6 d2 c8 60 72 be e0 9d 12 ed 64 b7 da 81 c8 77 77 bb b9 41 45 11 9a aa d8 45 3b 7e f2 52 f8 ea 64 66 0d 14 16 70 17 84 0a ce c6 de a8 05 88 27 fe 99 8b 18 cd 8d f7 2e 5a 9c c7 5f 08 89 96 d4 78 a1 13 fe fc 92 3b c6 e5 ac 3d 89 17 80 e3 03 f8 58 1f 73 fc ae c1 c2 3f 0c 1f 37 d3 48 91 32 a8 7c 96 53 36 61 7e 85 79 ce 1e 56 1c 7f fc 90 30 d0 a6 66 38 b7 4e dd 13 04 21 71 22 61 ee a0 e9 c7 ef 26 88 c9 3e 10 41 73 a0 53 93 94 c2 e0 3c c5 c5 a2 22 6c d1 a1 be 2d 9a 2d d9 2d c3 0c 2f 77 de 57 b1 73 2d 54 fa 35 75 d3 3e 31 0a 17 2e db c4 24 de 1e f0 11 86 7b c9 80 cf 5f 6c 92 77 69 ac			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:17:54 - 31/03/25 15:17:54			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.a6.c6			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:17:55 - 31/03/25 15:17:55			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	242609236			
Datos estampillados:	3JhP6oUnRqUI+RO8oiV2TQMrtMO=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	CARLOS CALDERON ESPINDOLA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.35.33	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:44:48 - 31/03/25 15:44:48	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	33 7f 37 b4 17 54 1f cd c0 20 66 8d 55 af 1d cb 7f e1 63 6e 40 b4 67 7a f1 1f 7d 35 ab 94 f1 fa 73 d2 49 36 fc c9 86 4a 10 59 71 d7 a7 9d ed 2e 0e 72 89 3b b7 a8 74 15 b2 89 e7 f2 bc 00 c3 f8 78 fa 6c 55 b0 cd 8e b2 50 62 d3 7c 31 68 35 5a 49 37 87 4c 2e b9 8d 7d 07 c0 97 5f 2f cb 38 bc 35 64 75 74 6f 5f fe f6 10 a5 5a 7e 1d 41 1d 2a d1 84 e6 bd c6 5a 13 bd 28 c3 83 99 f7 85 e4 b9 fd 4b 3a 47 e4 3d ee 43 fe 0e a4 ab 87 12 ad 13 63 6f 06 5f 4d f9 40 1a fb a7 9b 9d fd 3b 36 61 d2 69 45 79 fc 52 a1 4f b7 c9 27 7c a4 2a 64 12 3b 1f 8f 8e da 14 ad 15 c1 50 de 50 b7 e7 33 bc c6 98 c2 a1 11 be 5d 9c 94 00 5c 62 c7 3d 87 d4 92 39 2e cb 1c a6 95 0e a3 9a e7 d3 c3 43 a6 f2 95 a3 66 9d 8f fa 82 0e 46 90 9e 9e 64 ea 26 c4 9b d8 47 81 18 d6 26 cf f9 9e 8d 2c af 1b 75 24			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:44:48 - 31/03/25 15:44:48			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.35.33			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:44:48 - 31/03/25 15:44:48			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	242640191			
Datos estampillados:	aHHUc7npUyaoVE6nkG7fwZisUSs=			

El licenciado(a) Jackeline Huerta Castañeda, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.